

## Movimientos cristianos

Por Isidoro Moreno

Uno de los hechos más significativos de los últimos años, dentro del panorama político español, es la salida a escena de una serie de movimientos católicos que se definen, cada vez con mayor claridad, contra las situaciones de injusticia y la falta de libertades democráticas.

Dentro de esta línea se sitúan, entre otras, la reciente declaración de la Comisión Nacional de HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica), publicada en este diario el 25 del pasado agosto, y la carta que sobre los sucesos de Carmona han hecho pública, avalada por más de 600 firmas, los consiliarios y militantes de esta misma organización y de otros movimientos como JOC, JARC, Movimiento Junior, Movimiento Rural y Unión de Clubs Juveniles.

El hecho nos parece importante, porque supone una reafirmación en el protagonismo activo de estas organizaciones católicas al lado de las clases y capas populares en el esfuerzo común por conseguir una sociedad más justa. Lejos quedan así los tiempos en que los rectores conservadores podían contar con el respaldo casi automático de cuantas asociaciones y órganos de opinión se declaraban católicos. Ya no es cierto que ser católico en religión signifique automáticamente ser conservador en política, y va siendo cada vez más difícil condenar como «anticristianas» todas las ideas que pongan en entredicho la propiedad privada sin límites o la libertad de explotación de los débiles.

La declaración de la HOAC, clara y valiente, podría ser suscrita sin dificultad por cualquier demócrata,

sea o no creyente, porque se sitúa en ese terreno común donde confluyen los esfuerzos de todos los hombres que luchan por la consecución de la justicia y el desarrollo de la dignidad humana. En ella se denuncia, definiéndola como reflejo de la situación de injusticia social creciente, una serie de situaciones concretas que se padecen, como son el abandono en que se tiene al sector agrícola, especialmente al obrero y a los pequeños campesinos, la emigración a que se ven obligadas grandes masas de trabajadores del campo y la ciudad debido al paro, la eventualidad en el trabajo, el ejercicio del despido libre por parte de las empresas, los bajos salarios que exigen un pluriempleo continuado, la manipulación del consumidor mediante la publicidad, la vertiginosa subida de los precios, la falta de puestos escolares y las diversas selectividades —encubiertas o manifiestas— que establece el sistema educativo, el fracaso de los Polos de Desarrollo, etc.

Junto a estas situaciones de injusticia económica y cultural, la declaración denuncia otras de carácter específicamente político: «la ineficacia de los cauces legales para defender nuestros derechos» (de los trabajadores), la limitación, «que en muchas ocasiones equivale a la supresión de libertades cívicas, políticas y sindicales reconocidas por todos los organismos internacionales», y «la represión violenta sobre los obreros, como en los casos de Granada, Vigo, El Ferrol, Barcelona, Madrid, Carmona, etc.».

El llamamiento a la toma de conciencia respecto a estas realidades es bien explícito, instándose a todos los ciudadanos a que cumplan el deber «ineludible e inaplazable», de «presionar a través de la prensa, de las instituciones y de todos los medios justos a su alcance» para conseguir cuanto antes para todos el ejercicio real de las libertades democráticas, entre las que se señalan expresamente la libertad de expresión oral y escrita, de reunión, de asociación política y sindical, de conciencia y de huelga. También se pide a todos

que «presionen para conseguir la amnistía de todos los presos y exiliados políticos».

Los firmantes de la declaración señalan que ésta responde a un deber que nace tanto de su condición de ciudadanos —«porque exigimos derechos y libertades humanas»— como de cristianos —«porque lo exige nuestra fe en Jesucristo»—. «Nosotros también creemos que el pertenecer al menos a una de estas dos categorías —y todos poseemos la calidad de ciudadanos, seamos o no cristianos, que esto es algo que hay que dejar a la conciencia de cada cual— exige, como afirma la Comisión Nacional de la HOAC, presionar «por todos los medios justos para dar pasos reales hacia la democracia».

Y uno de estos pasos, nos parece, es el que están dando ya la HOAC y otras organizaciones cristianas que, por fin, han abandonado la anterior postura católica de prevención hacia las organizaciones no cristianas y están dispuestas a alinearse junto a ellas en el frente común de lucha contra las causas de esa situación de injusticia que valientemente están denunciando.

Es significativo, por otra parte, que grupos y organizaciones que también se definen como cristianas realicen un protagonismo político que no están precisamente en la línea de esas organizaciones católicas obreras, sino que se sitúan en la primera línea de la defensa de intereses ajenos a los del pueblo. Esto no debería sorprender a nadie y menos ser pretexto para ataques indiscriminados a las organizaciones cristianas en conjunto.

Las diferencias —que existen realmente y sería idealismo negarlas— entre las organizaciones católicas y las demás no deben obstaculizar la necesaria unión en el común esfuerzo para lograr que el pueblo sea «protagonista de su propia promoción», como reivindica la declaración de la HOAC.

Esto lo saben perfectamente esas organizaciones católicas que están situándose en un terreno político diametralmente opuesto al que defienden otros grupos

que también se proclaman católicos y que ahora no es el momento de analizar. Pero no es por azar que las que así lo han entendido no sean precisamente las organizaciones que acogen a las élites oligárquicas o tecnocráticas que se declaran cristianas, sino a la juventud y los obreros. Es decir, las que agrupan a las masas populares cristianas.

(14-IX-74)